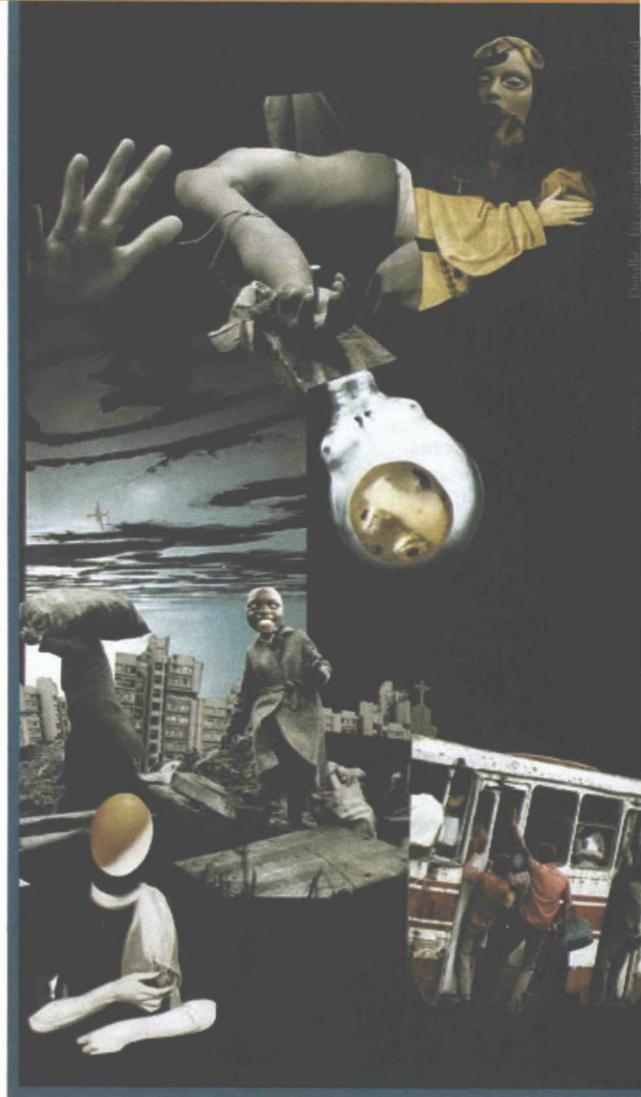


FLACSO - Biblioteca

Igualmente
POBRES,
desigualmente
RICOS



René Ramírez Gallegos

NB: 22/96

305
R1451

Es una publicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Dirección Institucional:

Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
José Manuel Hermida
Representante Adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Claudio Providas

Proyecto "Estrategia Nacional de Desarrollo Humano y ODM"- PNUD

Cordinación

Natalia García

Comunicación

Irina Moreno

Logística

Carolina Bastidas

Igualmente POBRES, desigualmente RICOS

©2008

Autor:

© René Ramírez Gallegos

Coautores:

Fernando Martín (Capítulo 2)
Julio Oleas (Capítulo 3)
Diego Martínez (Capítulo 7)
Analía Minteguiaga (Capítulo 8)

Editorial:

Ariel

Edición:

Alvaro Campusano (1^{ra} revisión)
María Elena Dávila (2^{da} revisión)

Ilustraciones:

Magalí Minteguiaga

Concepto editorial: graphus® 290 2760

Diseño: graphus® 322 7507

Impresión: Impresores Myl

ISBN: 978-9978-9939-0-3

Primera impresión: noviembre 2008

Quito - Ecuador

BIBLIOTECA - FLACSO - E C
Fecha: 27-02-2009
Compra: \$12.60
Proveedor: <i>Planta</i>
Canje:
Donación:

REG.
CUT. 0024931
22/96
BIBLIOTECA - FLACSO

Las opiniones y planteamientos expresados en esta publicación son responsabilidad exclusiva del autor y no compromete al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

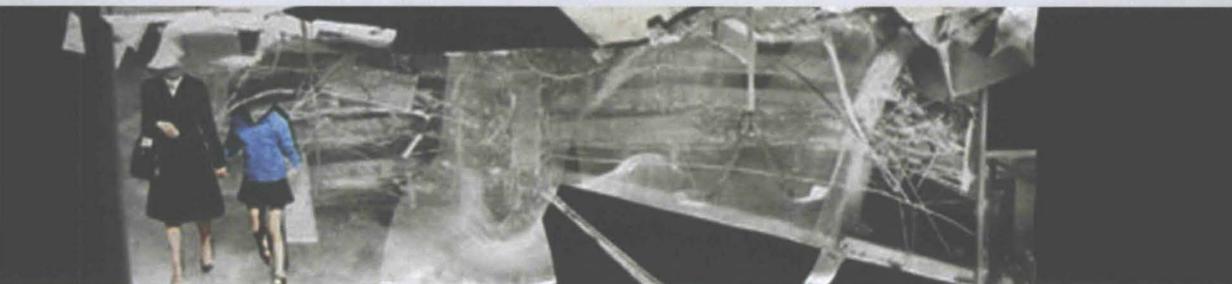
En caso de ser citado utilizar el siguiente formato:

Ramírez, René (2008). Igualmente pobres, desigualmente ricos. Quito: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

ÍNDICE

Biografías de autor	21
Introducción	25
Vivir como iguales, queriendo vivir juntos <i>René Ramírez Gallegos</i>	
PARTE I	
<hr/>	
ECUADOR EN EL MUNDO	43
CAPÍTULO 1	45
Crecimiento económico sostenido, desigualdad y reducción de la pobreza en los noventa: un debate abierto <i>René Ramírez Gallegos</i>	
CAPÍTULO 2	62
Una América Latina desarrollada a distintas velocidades: procesos de convergencia y divergencia económica en la región (1950-2000) <i>Fernando Martín y René Ramírez Gallegos</i>	
PARTE II	
<hr/>	
DESIGUALDAD Y BIENESTAR ECONÓMICO EN ECUADOR	123
CAPÍTULO 3	125
La desigualdad en Ecuador en el contexto macroeconómico, 1990 - 2006 <i>René Ramírez Gallegos y Julio Oleas</i>	
CAPÍTULO 4	150
Igualmente pobres, desigualmente ricos. Balance global sobre la desigualdad en Ecuador <i>René Ramírez Gallegos</i>	
CAPÍTULO 5	221
Desigualdad y felicidad económica en Ecuador <i>René Ramírez Gallegos</i>	

PARTE III	
Desigualdad y participación política	255
CAPÍTULO 6	257
Pseudo - salida, silencio y ¿deslealtad?: entre la inacción colectiva, la desigualdad en la representación política y el bienestar <i>René Ramírez Gallegos</i>	
CAPÍTULO 7	305
¿Quién y por qué (no)?: El perfil del participante y las razones del silencio o la activación de la voz pública en el Sistema de Concertación Ciudadana (SCC) <i>René Ramírez Gallegos y Diego Martínez</i>	
PARTE IV	
Ética política e igualdad	345
CAPÍTULO 8	347
¿Queremos vivir juntos?: la igualdad y la búsqueda de un lugar común <i>René Ramírez Gallegos y Analía Minteguiaga</i>	
CAPÍTULO 9	373
El Sur del cambio o propuesta de principios rectores para una nueva visión del desarrollo <i>René Ramírez Gallegos</i>	



Detalle - Silencio

PARTE II

DESIGUALDAD Y BIENESTAR ECONÓMICO EN ECUADOR

CAPÍTULO 3

LA DESIGUALDAD EN ECUADOR EN EL CONTEXTO MACROECONÓMICO, 1990-2006¹

*René Ramírez Gallegos
Julio Oleas*

En Ecuador y en toda la región, la denominada agenda del Consenso de Washington ha inspirado el esquema de crecimiento económico y la agenda de políticas públicas que han orientado los destinos del país durante las dos últimas décadas. Sus resultados son, en términos generales, del todo ambivalentes y mediocres y no han conducido a un tipo de crecimiento que garantice el desarrollo equilibrado, distribuidor de riqueza y sostenible de la sociedad y el pleno ejercicio de las libertades humanas.

Observar las específicas características de las políticas económicas y sociales del Ecuador de los años noventa, en el contexto regional, permitirá entonces determinar los puntos de transformación que requiere la construcción de una estrategia de desarrollo nacional y prefigurar los principales lineamientos de una nueva agenda de políticas públicas que pondrán las bases para que el país tenga un porvenir justo y democrático.

- **El horizonte regional**

La agenda de los últimos años en América Latina buscó entregar toda la coordinación del crecimiento y la distribución de los recursos sociales a los agentes del mercado y disminuir el poder de la comunidad política nacional, representada en el Estado, para orientar los objetivos, las metas y las funciones del desenvolvimiento económico y para corregir los desequilibrios internos y las grandes desigualdades sociales que dicho paradigma generó.

El retraimiento estatal implicó, así, no únicamente una apuesta por la privatización y la reducción de las principales agencias y funciones estatales sino sobretudo una apertura comercial indiscriminada, la desregulación de los mercados financieros, la flexibilización laboral y el carácter subsidiario y asistencialista de la política social.

¹ Agradecemos los importantes aportes dados por Franklin Ramírez. No obstante, lo dicho en este artículo es estricta responsabilidad de los autores.

Este conjunto de opciones puso por delante la atracción de inversiones extranjeras privadas, la promoción de exportaciones de materia prima y, sobre todo, la protección e incentivo del capital financiero y especulativo sobre las dinámicas productivas nacionales y locales. Tales lineamientos no llegaron a constituirse en una estrategia autónoma de desarrollo nacional sino, apenas, en un esquema de adecuación subordinada a la liberalización comercial en que solo los segmentos más especializados y modernos de la economía obtuvieron relativos beneficios.

La desconexión entre la agenda del Consenso de Washington y una efectiva estrategia de desarrollo se observa al constatar que las reformas no estuvieron acompañadas de la suficiente inversión productiva ni tampoco de inversión adecuada en capital humano y en innovación tecnológica para la producción. Así, en los noventa, América Latina invirtió en promedio 5 puntos menos del PIB que en 1970, y solo unas décimas más que en la década perdida de los ochenta.

Ello explica el bajo crecimiento de la región en comparación con otros espacios económicos a nivel global. Una salvedad importante en este panorama fue Chile. Entre 1990 y 1998 este país creció 7%. Los factores determinantes en este aumento fueron tanto las reformas efectuadas por los gobiernos democráticos a la agenda «hiper liberal» heredada de la dictadura —control de capitales financieros por ejemplo— como la tasa de inversión productiva. Chile invirtió en los noventa 10 puntos del PIB más que durante el gobierno militar. En ese mismo periodo, América Latina invirtió 5 puntos menos que en los setenta (French-Davis, 2007). Así se hizo evidente cómo el sostenimiento de los sectores financieros fue siempre prioritario sobre la reactivación productiva a lo largo de los últimos quince años de reformas estructurales.

La prioridad otorgada en los últimos 25 años a los mercados financieros redundó en la *inestabilidad del crecimiento económico*. Es así que, bajo el entendimiento de que el desarrollo nacional depende del flujo de inversión privada, el crecimiento económico se supeditó a un acceso, siempre volátil, a la oferta externa de capitales. Durante los periodos de auge del financiamiento externo, o del *boom* de capitales de corto plazo, promovido por la liberalización financiera entre 1990 y 1994 y entre 1995 y 1998 —precisamente en el periodo de mayor avance de las reformas liberales en América Latina— la región sufrió un fuerte crecimiento del déficit externo y un atraso cambiario que generaron ciclos de vulnerabilidad y crisis que fueron encadenándose progresivamente.

A la crisis mexicana de 1995 le siguieron en 1998 la crisis asiática y en el ciclo 2000-2002 la crisis argentina. Entre 1998 y 2003, el conjunto de la región vivió una situación recesiva: «el PIB por habitante decreció igual que durante la crisis de la deuda en los ochenta. Estos ciclos financieros han determinado también los ciclos productivos y generaron una brecha entre el potencial de la economía y su desempeño efectivo» (French-Davis, 2007: 49).

Las crisis financieras han incidido, a su vez, en un aumento de la pobreza y una regresión redistributiva. Ello implica que las crisis han afectado de manera diferenciada y con un efecto regresivo a las personas que se encuentran en los quintiles de menores ingresos y en las pequeñas y medianas empresas. Su recuperación posterior es en extremo lenta.

Así, aunque en términos relativos se dio en América Latina una disminución de la pobreza —pasó del 46% en el ciclo 1981-1990 a 41,8% en el periodo 1998-2003— en términos absolutos habría un aumento aproximado de 13 millones de pobres, según la CEPAL (2006) o un incremento de 19 millones según el PRODDAL-PNUD (la pobreza habría ascendido de 190 a 209 millones entre 1990 y el 2001). Cabe resaltar, además, que incluso en términos relativos la pobreza se incrementó durante tal periodo en el Cono Sur —del 25,6 al 29,4%—, en los países andinos —del 52,3 al 53,3%— y en Centroamérica —del 45,2 al 51,2%— (PNUD, 2004). Solo en el caso de Brasil se registra un progreso constante en la lucha contra la pobreza: de 48,0 a 39,0 entre 1990 y 2003 (CEPAL, 2006).

La agenda del Consenso de Washington tuvo, entonces, en toda la región un gran margen de responsabilidad en la secuela de crisis económica y social que vivieron casi todos los países latinoamericanos en la segunda mitad de la década de los noventa. J. Stiglitz ha identificado al menos tres fracasos estructurales de la agenda que guió la política económica en todo el continente (Stiglitz, 2003):

- Las reformas, incluidas las diversas formas de liberalización, aumentaron la exposición de los países al riesgo, sin acrecentar su capacidad de hacer frente a ese riesgo.
- Las reformas macroeconómicas no eran equilibradas, porque asignaban demasiada importancia a la lucha contra la inflación y no atendían lo suficiente a la lucha contra el desempleo y la promoción del crecimiento.
- Las reformas impulsaron la privatización y el fortalecimiento del sector privado, pero dieron muy poca importancia al mejoramiento del sector público; no mantuvieron el equilibrio adecuado entre el Estado y el mercado.

En sociedades en que las competencias regulativas y redistributivas del Estado apenas empezaban a consolidarse —porque, en efecto, los Estados latinoamericanos nunca llegaron a constituirse en verdaderos Estados de bienestar—, las políticas de desmantelamiento del Estado y de apertura de amplios márgenes de maniobra a los agentes privados y a los mecanismos de coordinación puramente mercantiles han sido vistas como una verdadera deserción pública y un abandono de la población a su propia suerte.

Ecuador no ha sido la excepción: la debilidad estatal y la baja eficacia institucional de las agencias estatales a la hora de coordinar los agentes económicos en torno a metas de desarrollo social, sustentable y equitativo han dejado como secuela un país con pequeñas islas de modernidad y prosperidad e inmensos sectores poblacionales en situaciones de pobreza, exclusión y precariedad social.

- **El Ecuador del “Consenso de Washington”**

Ecuador ha basado su crecimiento en modelos económicos cuyo objetivo fundamental ha sido producir más cantidad de mercancías. El valor de estas mercancías, usualmente representado por el Producto Interno Bruto anual, y su tasa de crecimiento, han sido variables que han orientado una política productivista, sin reparar si el valor generado es apropiado por la sociedad en su conjunto o por monopolios extranjeros, o si una deuda externa injusta, arbitraria y desmedida puede restar del consumo y la inversión nacional buena parte de los efectos del crecimiento. El Producto Interno Bruto y la masa de bienes disponibles para el consumo y la inversión nacionales pueden no ser siempre los instrumentos adecuados para promover un desarrollo integral de la sociedad, incluso si se alcanzan adecuadas metas de producción.

Aunque éste no ha sido el caso en Ecuador, es cierto que el modelo de crecimiento existente en los últimos quince años ha conducido a la simplificación de la producción nacional por el predominio de aquellas ramas económicas que generan rentas por precios internacionales favorables, mientras que las posibles bases de una estructura productiva nacional y autónoma han sido barridas por un modelo de importaciones que beneficia a consumidores de altos ingresos y a empresarios especuladores. La reprimarización de la economía, la escasa inversión productiva y el énfasis en la protección del capital financiero han impedido, en efecto, la reactivación de la estructura productiva nacional y su plena diversificación para un rendimiento más equilibrado de la economía.

Por lo demás, la competitividad centrada en la reducción de costos del trabajo y en la obtención de rentas extractivas a costa de la fragilidad de los ecosistemas, junto a la desregulación del mercado y la ineficacia de un sistema tributario que no permite obtener los impuestos del capital y de los contribuyentes de mayores ingresos, son factores, avanzados por dicha agenda, que tuvieron graves consecuencias en el debilitamiento de las funciones del Estado como garante de derechos, como productor de bienes públicos de calidad y como promotor eficiente de un desarrollo humano, estable y soberano.

Hasta hoy, los conceptos de producción y crecimiento económico han sido entendidos como sinónimos de desarrollo, mientras se han dejado de lado otros factores que inciden en el tipo y la calidad del desarrollo, como son la apropiación de los activos productivos, la distribución del ingreso y los impactos ambientales de ese crecimiento. Las consecuencias de largo plazo para la sociedad son así ignoradas, lo que profundiza las tendencias a la insostenibilidad social, económica y ambiental del crecimiento, a la desigualdad y a la inequidad en el acceso a sus frutos, y al bloqueo de un desarrollo humano, entendido como un proceso soberano, incluyente, democrático, solidario, igualitario y ecológicamente sostenible en el que cada uno puede ejercer sus libertades y desarrollar digna y plenamente sus capacidades.

Si la economía debe ser juzgada por las capacidades de desarrollo autónomo y la calidad de vida que sustenta, Ecuador ha tenido una economía irracional, inmoral e incluso poco eficiente². Durante la última década Ecuador no ha logrado avances significativos en la reducción de la pobreza y de la desigualdad social, y la superación parcial de la situación extrema de 1999 se debe sobre todo a la evolución coyunturalmente favorable de factores externos y a la dolorosa emigración de compatriotas, antes que a la pertinencia de la agenda económica ortodoxa o a las decisiones de los grupos económicos más concentradores.

Más aún, la fragilidad de las instituciones estatales y del aparato productivo se evidenció al final del siglo pasado, cuando no hubo capacidad de enfrentar adecuadamente factores adversos como el fenómeno de El Niño (1998) y la crisis bancaria (1999), que

2 En general, el sistema productivo ecuatoriano ha incrementado su fragilidad ante catástrofes naturales y su dependencia de factores externos; presenta un alto grado de concentración industrial que lo aleja de la utopía del mercado competitivo autorregulado; existen hoy 600 000 personas pobres más que hace 13 años; y el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación han avanzado a pesar de lo cual estos indicadores no se consideran como costos de las empresas en la valoración de los resultados obtenidos, lo que muestra que el beneficio privado no se deriva de la eficiencia sino que está subsidiado por la sociedad.

determinaron un incremento de la pobreza del 12,84% entre 1995 y 1999, hasta alcanzar el 52,18% de la población del país (Cuadro 1). La estabilidad nominal provista por la dolarización permitió que seis años más tarde, en 2006, la pobreza y la pobreza extrema retornaran a niveles similares a los registrados hace una década. No obstante, dado el crecimiento poblacional y sabiendo que la tasa de fecundidad de los más pobres es más elevada que el resto de la población, se puede hablar que en los últimos 10 años existe un mayor número de pobres en términos absolutos en el Ecuador.

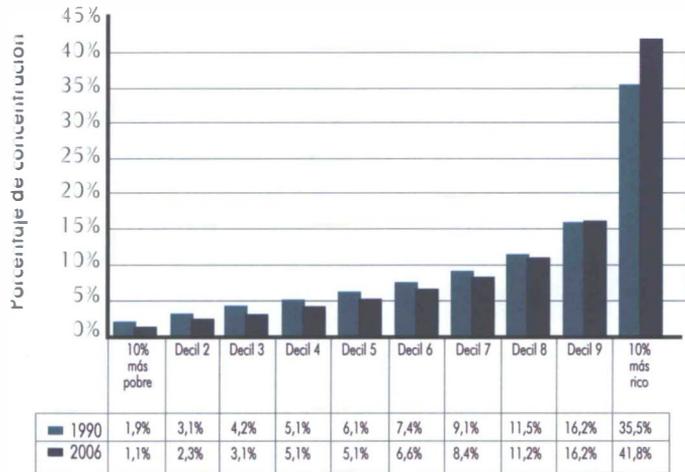
**CUADRO 1. EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y EXTREMA POBREZA DE CONSUMO, 1995-2006
—COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN—**

ECV	1995		1998		1999		2006	
	Pobreza	Extrema pobreza						
Región								
Costa	36,07	9,06	46,44	16,30	52,85	15,98	40,31	10,85
Sierra	41,73	18,53	42,15	21,77	51,44	24,65	33,75	12,20
Amazonía	60,57	23,80	50,04	22,25	n.d.	n.d.	59,74	39,60
Área								
Campo	63,00	27,37	66,75	33,91	75,05	37,68	61,54	26,88
Ciudad	23,02	4,11	28,72	7,80	36,39	7,99	24,88	4,78
Nacional	39,34	13,60	44,75	18,81	52,18	20,12	38,28	12,86

Fuente: SIISE-INEC con base en INEC, ECV. Varios años.

Por lo demás, los problemas ocasionados por los desastres naturales, la crisis financiera o el cambio de moneda no han impactado en forma simétrica a la población. Según el SIEH-ENEMDU, entre 1990 y 2006 solo los hogares pertenecientes a los estratos de ingresos más altos no vieron retroceder su ingreso per cápita, mientras que, sistemáticamente, los ocho primeros deciles de la población redujeron sus niveles de percepción de ingresos. En los 16 años considerados, el decil nueve mantuvo su participación del ingreso en el 16,2%, mientras el decil más favorecido lo incrementó del 35,5% al 41,8% (gráfico 1). Se puede observar que en el periodo mencionado se produjo un proceso de polarización social reflejado en lo siguiente: mientras en 1990 la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre era de 18,6, en el 2006 esta diferencia es de 38.

GRÁFICO 1. CONCENTRACIÓN DEL INGRESO PER CÁPITA DEL HOGAR



Fuente:
SIEH-ENEMDU,
1990-2006

Por otro lado, en el periodo de liberalización —como señalan Vos, Taylor y Páez de Barro (2002)— y en contra de lo que prevé la teoría neoclásica, el proceso de apertura de la economía ecuatoriana no generó un incremento de la demanda de nuestro factor más abundante, aquel formado por la mano de obra poco calificada, sino que por el contrario generó un incremento de la demanda de mano de obra de alta calificación. Dicho proceso provocó, a su vez, un aumento de la brecha salarial entre calificados y no calificados y con ello contribuyó adicionalmente al incremento de la concentración del ingreso y de la desigualdad antes descrito³.

La reducción de la pobreza (del 52,18% al 38,28% entre 1999 y 2006), no está asociada a transformaciones estructurales dirigidas a generar empleo y a subyugar la desigualdad. Las políticas sociales «focalizadas» siguen viendo a la persona pobre como un «otro» que requiere asistencia, pero cuya inclusión social se abandona a la improbable reacción mecánica de un mercado que en realidad orienta a los inversores hacia la asi-

3 Tal proceso no parece haber cambiado dado que no es simple coincidencia que hoy en día la escolaridad promedio de los trabajadores dedicados a las actividades exportadoras (el denominado sector transable) tenga una tasa de escolaridad casi cuatro años mayor que la de los sectores dedicados a las satisfacciones propias del mercado interno (el denominado sector no transable de la economía).

milación de tecnologías expulsoras de mano de obra. La evolución de la pobreza está vinculada a los ciclos económicos, en especial a los precios internacionales del petróleo y al ingreso de remesas. En consecuencia, el crecimiento, entendido en un sentido abstracto⁴, y la estabilidad macroeconómica son condiciones necesarias, pero no suficientes, para reducir la pobreza. Más aún, el crecimiento y la estabilidad macro no son valores en sí mismos, son instrumentos que deben articularse en beneficio de todos, pero sobre todo de los pobres; es decir, deben considerar al mismo tiempo mecanismos de inclusión social y productiva de los grupos más vulnerables del país⁵.

Por un lado, el ingreso y el consumo de los hogares no han sido distribuidos de manera equitativa, lo que ha frenado el crecimiento de la demanda agregada y las posibilidades de expansión de la economía nacional. Por otro lado, la producción muestra un proceso de concentración industrial que favorece a las empresas formadoras de precios a costa de las empresas tomadoras de precios⁶, limita las condiciones reales de competencia, obstaculiza prácticas de mercado transparentes y frena la expansión de la demanda de empleo formal, bien remunerado e incluyente. Las limitadas capacidades reguladoras del Estado, junto a un sistema financiero convulsionado por la peor crisis que registra la historia económica del país y despreocupado de los requerimientos sociales de inversión y fomento productivo, han acelerado además una concentración industrial que coincide con los resultados de la economía de mercado libre que ya estaban empíricamente verificados en otras experiencias. Estas coincidencias arrojan sospechas no solo sobre la inteligencia sino también sobre las intenciones de los defensores del proyecto liberalizador en nuestro país, cuando los mismos países industrializados continúan recurriendo a la regulación de mercados nacionales y globales por parte de sus estados. La concentración industrial en Ecuador, medida por el coeficiente de Gini, demuestra la desigual estructura de la industria nacional y evidencia que la producción industrial es abarcada por pocas empresas (cuadro 2).

4 Se entiende como un crecimiento abstracto porque no crea una estructura productiva que sea capaz de integrar el trabajo nacional y promover una soberanía nacional ante las variaciones de los factores externos.

5 Por el contrario, en el país se ha mantenido la mirada sesgada del denominado neoliberalismo, preocupada por la estabilidad absoluta de precios y la inflación cero para garantizar el cálculo de ganancias de corto y mediano plazo del capital que ingresa y egresa libremente. Los países de la periferia que han experimentado altas tasas de crecimiento con mejoría en la distribución del ingreso a favor de los asalariados y con un gasto público que activa la economía y provee de bienes públicos indispensables son países que han tenido tasas de inflación necesarias y perfectamente asimilables.

6 Se entiende por empresas formadoras de precios a aquellas pocas empresas con carácter monopolístico que pueden aumentar los precios de sus productos sin enfrentar una disminución importante de la demanda. Las empresas tomadoras de precios, en cambio, son las pequeñas empresas que no poseen mayor injerencia en la definición de los precios del mercado.

CUADRO 2. CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL 2005*: COEFICIENTE DE GINI**

	Bebidas ¹	Lácteos ²	Comercio ³	Hoteles ⁴	Construcción ⁵
Ventas	0,965	0,950	0,941	0,882	0,801
Activos	0,951	0,943	0,941	0,921	0,894

* Ramas elegidas al azar.

** El coeficiente de Gini del consumo es una medida estadística de la desigualdad en la distribución del consumo per cápita de los hogares, que varía entre 0 y 1. Muestra mayor desigualdad mientras se aproxima más a 1 y corresponde a 0 en el caso hipotético de una distribución totalmente equitativa.

1. 31 empresas, de las cuales 7 no reportaron ventas.
2. 97 empresas, de las cuales 46 no reportaron ventas.
3. 80 empresas, de las cuales 18 no reportaron ventas.
4. 100 primeras empresas por ventas.
5. 100 primeras empresas por ventas.

Fuente: Producto Indicador, 2005.

Tomando como referencia los niveles de concentración en Estados Unidos y Europa, los niveles de concentración de Ecuador son, con mucho, superiores, como se puede apreciar en el cuadro 2^a.

CUADRO 2^a. CONCENTRACIÓN Y DESIGUALDAD ENTRE EMPRESAS EN ESTADOS UNIDOS Y EUROPA: ÍNDICE DE GINI

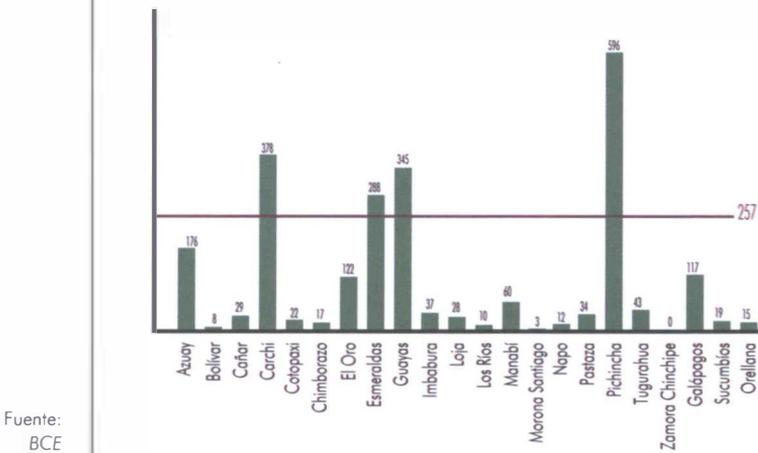
Sector / Año	Estados Unidos		Europa	
	2000	2001	2000	2001
Bienes duraderos*	0,70	0,71	0,68	0,67
Bienes no duraderos*	0,53	0,60	0,55	0,57
Tecnologías de la información*	0,86	0,79	0,76	0,72
Recursos naturales*	0,59	0,75	0,63	0,75

Fuente: Campos, Javier y Juan Luis Jiménez. 2002. Concentración agregada y desigualdad entre empresas: Una comparación internacional.

Cálculo en base a datos tomados del Financial Times, 2002, utilizando su base de datos empresarial de ámbito internacional, FT-500 (1). En ella se agrupan, por regiones, las 500 mayores empresas del mundo según su capitalización bursátil (2). Más concretamente, las regiones y número de empresas de las que disponemos son: Global (500 mayores empresas a nivel mundial), Europa (500), USA (500), Japón (500), Reino Unido (500), América Latina (100), Europa del Este (100), Canadá (100) y Oriente Medio (50), todas para los años 1999-2001.

Las inequidades que ha consolidado este esquema de crecimiento no se limitan a la distribución del ingreso o a la concentración de la propiedad privada (extranjera y nacional) del aparato productivo. La preponderancia otorgada al sector externo como guía del crecimiento económico inhibe un equilibrado desarrollo humano en todo el territorio nacional ya que evita que sus regiones se integren en un proceso armónico en el que se reduzcan las disparidades. Según el Servicio de Rentas Internas, en 2004 la carga tributaria de la población ecuatoriana fue de USD 257 por habitante. Sin embargo, solo en 4 de las 22 provincias la carga por habitante fue superior a esa media. En ese año, mientras un habitante promedio de la provincia de Pichincha contribuyó al Erario con USD 596, uno de la provincia de Morona Santiago lo hizo con USD 3 y en Zamora Chinchipe simplemente no se registró contribución alguna (Gráfico 2). Estas desigualdades en la captación de ingresos —así sean por problemas de domicilio fiscal— por las poblaciones de regiones que tienen capacidades humanas y recursos naturales que el mercado no valora o que utiliza de manera expoliadora ilustran otros aspectos de la irracionalidad del modelo económico y de la injusticia social que le es propia, asuntos que se muestran de forma más aguda todavía en los niveles cantonal y parroquial.

GRÁFICO 2. TRIBUTACIÓN POR HABITANTE POR PROVINCIA, 2004



El modelo de crecimiento que se ha perfilado en los últimos quince años ha dependido excesivamente de actividades extractivas (en especial de la explotación de petróleo) y de producción de bienes primarios para la exportación, como parte de un proceso de reprimarización de la economía. Las políticas de liberalización provocaron que los países de menor desarrollo abrieran sus economías mediante la desregulación de los mercados de capitales y de bienes. Las desigualdades internacionales hicieron que estos países terminaran hipotecando sus mercados a las empresas del mundo desarrollado, lo que produjo catastróficos resultados sobre las pequeñas y medianas empresas nacionales y sus trabajadores.

Las incongruencias lógicas y éticas de tal modelo se evidencian, así, cuando se privilegia la libre movilidad de capitales y mercancías, pero al principal factor productivo, la fuerza laboral, no se le permite circular libremente a través de las fronteras y menos emigrar legalmente hacia los países del norte. Sin embargo, la violencia del ajuste global impulsa a las familias a fragmentarse y desarraigarse recurriendo a canales extralegales que los países del norte ambiguamente atacan pero que en la realidad admiten porque generan reservorios de mano de obra que trabaja «en negro», sin derechos y muy mal pagada para los estándares de sus sindicatos. Así, el Consenso de Washington sirvió básicamente para reafirmar la estructura de la distribución internacional del trabajo. Esta estructura fomenta entre los países menos desarrollados la producción de mano de obra barata que genera bienes de escaso valor agregado que exporta a bajos precios a los países desarrollados.

A pesar de que en el periodo más fuerte de liberalización de la economía se dio mayor importancia relativa a los sectores transables del aparato productivo (los que pueden comercializarse en el mercado internacional), durante la década pasada estos sectores experimentaron limitados incrementos de su productividad. Entre 1992 y 1997, hubo un incremento del 2,4% para todos los transables y del 1,3% para los transables excepto petróleo. Por otro lado, las ramas intensivas en el uso de capital —petróleo (transable), electricidad y agua (hasta ahora no transables)— tuvieron crecimientos significativos de su productividad (8,5% y 13%, respectivamente), pero su demanda de empleo apenas alcanzó el 0,7% de la demanda total de empleo de los sectores no agrícolas. Mientras tanto, las ramas de actividad no transables no agrícolas, que ocuparon el 82,7% de la demanda total de empleos no agrícolas, tuvieron un retroceso del 0,9% en su productividad⁸.

8 Rob Vos. 2002. «Ecuador: economic liberalization, adjustment and poverty, 1988-99». En Rob Vos, Lance Taylor y Ricardo Páez de Barros. *Economic Liberalization, distribution and Poverty. Latin America in the 1990s*. Edgard Elgar Publishing Limited, UK.

El Cuadro 3 presenta las tasas de variación de la productividad total de los factores (PTF) para el periodo 1994-99, según la metodología empleada por el Banco Central del Ecuador. En general, estas estadísticas permiten concluir que a pesar de que el discurso pone a la productividad como objetivo y como medio para el crecimiento, durante los años noventa el crecimiento de la productividad fue prácticamente nulo. Ello, conjugado con una estrategia de ajuste estructural en la política cambiaria, exacerbó una crisis distributiva de la que resultaron beneficiados los segmentos poblacionales de mayores ingresos. En otras palabras, hemos estado regidos por un modelo con evidentes contradicciones lógicas y empíricas que pretende legitimar la desregulación del mercado y la redistribución inversa de ingresos como vía para las altas tasas de beneficio de algunos grupos económicos y ni siquiera del conjunto del empresariado nacional. Esta evidencia empírica debería ser suficiente para desactivar el poder de quienes siguen propiciando más de la misma medicina para la sociedad ecuatoriana. Organismos internacionales como el PNUD y la CEPAL ya han tenido que revisar sus fórmulas de los noventa para afirmar que **sin redistribución del ingreso ahora no habrá crecimiento futuro y mucho menos «derrame»**, por lo que evidentemente hay intereses desleales y poco éticos en la defensa de lo indefendible en nombre del interés nacional.

**CUADRO 3. CONTRIBUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES (PTF)
AL CRECIMIENTO DEL VALOR AGREGADO POR RAMA DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA —TASA DE CRECIMIENTO DE LA PTF—**

Rama	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Cultivo de banano, café y cacao	3,1%	-2,6%	-5,1%	-4,5%	-30,0%	21,3%
Cultivo de cereales	10,5%	-4,8%	7,1%	6,6%	-28,4%	-6,1%
Cultivo de flores	-6,7%	-17,3%	-10,3%	18,1%	-9,1%	-20,9%
Otros cultivos	-5,5%	-13,3%	-0,7%	-15,5%	-5,4%	2,5%
Cría de animales	6,3%	-4,0%	4,6%	2,9%	3,3%	-0,5%
Silvicultura y extracción de madera	7,7%	-2,1%	-3,1%	5,0%	0,4%	0,1%
Cría de camarón	8,6%	-0,3%	-9,7%	21,3%	-7,8%	-29,2%
Pesca	9,4%	-3,8%	1,4%	-5,5%	-7,2%	-0,3%
Explotación de minas y canteras	-3,1%	-182,7%	3,1%	-45,9%	-25,6%	-8,1%
Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	-0,4%	7,1%	2,5%	-0,5%	-7,4%	-9,1%
Elaboración y conservación de camarón	3,0%	12,6%	4,0%	15,6%	-18,9%	-27,5%
Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado	14,9%	48,8%	-0,7%	-30,8%	-47,4%	-0,1%
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal	9,0%	-8,1%	1,2%	-4,5%	7,1%	7,6%
Elaboración de productos lácteos	-3,1%	-2,6%	-2,2%	-7,7%	-1,4%	-7,2%
Elaboración de productos de molinería y panadería	1,6%	-12,6%	8,8%	1,1%	5,7%	-6,0%
Elaboración de azúcar	3,5%	10,1%	10,4%	-31,9%	8,1%	-28,0%
Elaboración de cacao, chocolate y productos de la confitería	-1,0%	17,5%	2,6%	-18,0%	-11,6%	8,8%
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.	5,2%	-8,7%	8,8%	-10,3%	1,3%	11,2%
Elaboración de bebidas	3,2%	19,2%	3,9%	-2,6%	-5,7%	-2,9%
Elaboración de productos del tabaco	0,6%	7,5%	9,8%	1,5%	4,4%	14,7%
Fabricación de productos textiles, prendas de vestir, de cuero y artículos de cuero	3,5%	5,1%	14,4%	5,8%	-3,0%	-6,7%
Producción de madera y fabricación de productos de madera	-6,5%	23,5%	2,3%	-1,2%	-1,2%	-0,8%
Fabricación de papel y productos de papel	19,5%	6,7%	2,0%	-0,2%	-8,6%	-6,1%

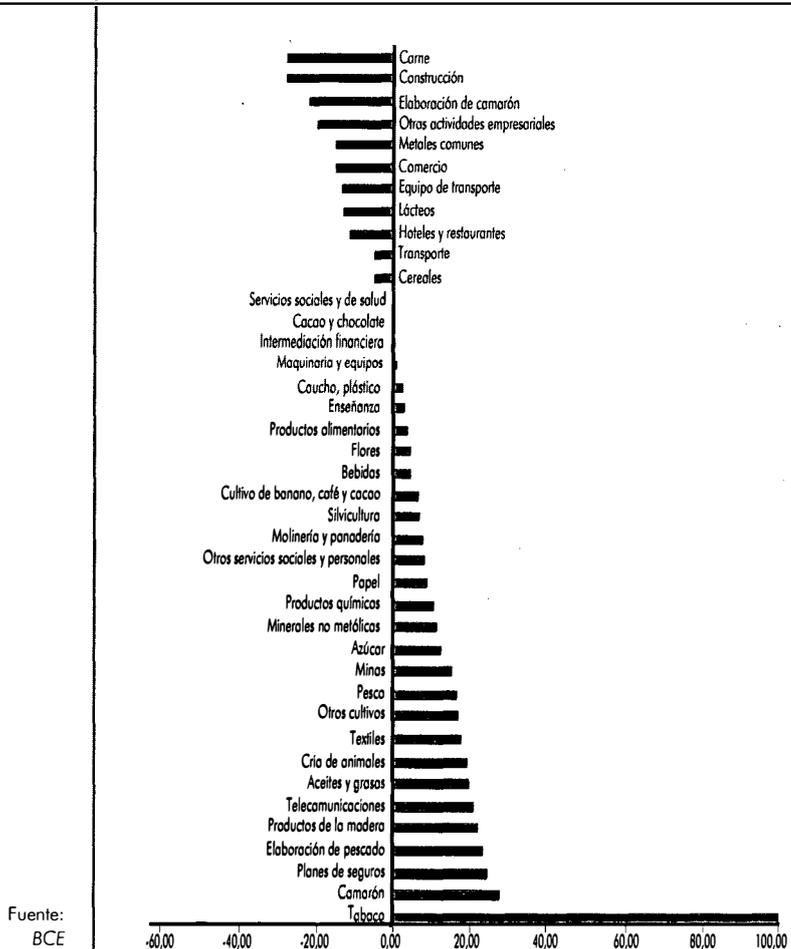
Rama	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Fabricación de sustancias y productos químicos	6,3%	3,6%	0,5%	-9,3%	6,2%	-9,4%
Fabricación de productos de caucho y plástico	-1,3%	5,7%	-9,1%	-2,8%	-4,7%	-16,0%
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	5,2%	-13,1%	4,3%	-9,4%	0,3%	-7,1%
Fabricación de metales comunes y de productos elaborados de metal	4,1%	-2,2%	3,1%	-24,5%	9,5%	-25,3%
Fabricación de maquinaria y equipo	10,4%	7,0%	1,8%	-3,7%	-0,7%	-14,4%
Fabricación de equipo de transporte	7,3%	11,3%	-21,3%	-4,4%	-4,8%	-22,1%
Construcción	0,2%	-1,0%	-1,8%	-4,2%	-8,3%	-35,4%
Comercio al por mayor y al por menor	-4,1%	-8,5%	-0,1%	-2,5%	-6,6%	-16,2%
Hoteles y restaurantes	-0,5%	-4,9%	-5,8%	-10,9%	-6,0%	-18,6%
Transporte y almacenamiento	1,3%	-1,3%	1,2%	-6,1%	-1,1%	-5,6%
Correos y telecomunicaciones	0,7%	23,1%	14,3%	9,2%	34,0%	-1,8%
Otras actividades empresariales	-2,0%	10,5%	7,6%	-7,3%	-18,2%	-22,2%
Intermediación financiera excepto seguros	28,8%	11,8%	8,5%	-6,8%	-24,2%	-47,9%
Planes de seguros y de pensiones, excepto los de seguridad social de afiliación obligatoria	47,1%	37,2%	-47,2%	-5,8%	22,3%	0,2%
Enseñanza	-4,3%	-3,7%	-3,1%	-24,5%	-17,9%	-2,9%
Servicios sociales y de salud	-191,6%	-26,7%	-21,1%	-17,7%	-17,2%	-13,0%
Otros servicios sociales y personales	-85,3%	13,3%	-22,7%	-4,8%	-4,3%	-21,0%

Fuente: BCE.

Entre 1993 y 1999, periodo en que la liberalización tuvo su apogeo, solo 13 de 40 ramas de actividad analizadas por el BCE tuvieron incrementos absolutos de la productividad media del trabajo superiores al 20% (minas, pesca, otros cultivos agrícolas, textiles, cría de animales, aceites y grasas, telecomunicaciones, productos de la madera, elaborados de pescado, planes de seguros, camarón —hasta que la Mancha Blanca destruyó el monocultivo— y tabaco, Gráfico 3). Esta frágil estructura productiva se desarrolló en un escenario macroeconómico de ajuste anclado al tipo de cambio, que propició conduc-

tas especulativas en los mercados cambiario y monetario en desmedro de la economía productiva. El impacto del fenómeno de El Niño y la debacle del sector financiero a finales del siglo pasado detonaron la peor crisis económica que recuerda el país, crisis que sería conjurada con la eliminación del riesgo cambiario. Con el argumento de «sostener» la dolarización se profundizaron las políticas de desregulación del mercado laboral, el control de los déficits fiscales y la liberalización de la inversión extranjera, mientras el resto de factores económicos permanecieron invariables. La consolidación de las estabildades nominales tardó casi cuatro años y la pobreza convergió lentamente hacia los niveles registrados en 1995 (cuadro 1).

GRÁFICO 3. VARIACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD MEDIA DEL TRABAJO 1993-1999



Si bien este conjunto de datos da cuenta de dos décadas perdidas de desarrollo, existe además un espejismo en el crecimiento que se da a partir de la crisis vivida en el país luego del salvataje bancario propiciado por las elites políticas conservadoras en 1999 a fin de sostener a un sector plagado por enormes deficiencias de gestión y amplios márgenes de discrecionalidad e intereses vinculados en el manejo de los ahorros de la ciudadanía.

Desde el 2000, el argumento central para sostener la dolarización se ha basado en la necesidad de exportar cada vez más para financiar la balanza externa en un escenario general de apertura económica. Sin embargo, los resultados alcanzados muestran el fracaso de esta estrategia. Si bien entre 2000 y 2005 el índice de apertura de la economía ecuatoriana se incrementó del 0,748 al 0,812, lo que según la ortodoxia predominante indicaría una evolución apropiada de la economía, la balanza comercial (incluye bienes y servicios) se deterioró, al pasar de menos USD 104,2 millones a menos USD 803,7 millones entre los mismos años. Este deterioro se debió a un crecimiento real de las importaciones del 45,1%, mientras que las exportaciones solo crecieron el 34,1%, en especial debido a la evolución del precio internacional del petróleo, variable totalmente fuera de control y que oscila de acuerdo a factores exógenos (Cuadro 4)⁹. El aumento de las importaciones no necesariamente significa un abaratamiento de los costos ni un aumento de la competitividad de la producción nacional remanente, pues son otros factores los que crean tal competitividad (credibilidad de las instituciones, paz social basada en un efectivo avance en la justicia para todos, calidad y pertinencia de la educación, un adecuado sistema de ciencia y tecnología, regulación de los mercados, confianza en el desarrollo del mercado interno, clara voluntad política de promover el desarrollo de la industria nacional, desarrollo de un sector de economía social y solidaria que atienda necesidades que las empresas no resuelven por no ser negocio y que integre al trabajo productivo a los excluidos por las empresas de capital, etc.). Por el contrario, el incremento de las exportaciones implica otros dos procesos negativos para el bien común: la conversión de un sector de empresas de orientación productiva al sector intermediario o especulativo (financiero, inmobiliario) y la competencia desleal (*dumping social*) a la producción de la economía popular que es también degradada a la mera intermediación (sector informal urbano) o desplazada del mercado (pequeña producción agropecuaria). La seguridad y, más aún, la soberanía alimentaria se deterioran gravemente, y para compensar ese déficit del comercio exterior, se privilegian las ex-

9 Las cifras del cuadro 4 son diferentes a las usualmente empleadas para diagnosticar el sector externo de la economía ecuatoriana. Se prefiere utilizar dólares constantes de 2000 para precisar el impacto real de la dolarización en la economía productiva.

portaciones no solo de productos competitivos a costa de la vida de los trabajadores; sino de condiciones no renovables de la naturaleza, lo que genera desequilibrios ecológicos que tendrán fuertes repercusiones en el futuro.

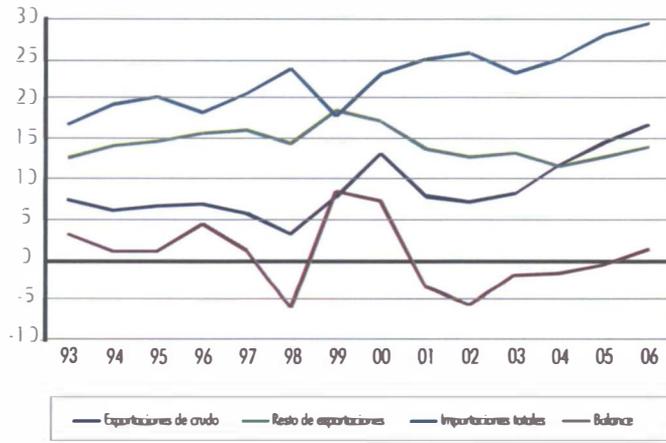
CUADRO 4. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS, 2000 -2005 -MILLONES DE DÓLARES DE 2000-

	Importaciones			Exportaciones			Balance		Índice de apertura	
	2000	2005	Variación	2000	2005	Variación	2000	2005	2000	2005
1. Agricultura, ganadería y silvicultura	170,1	259,8	52,8	1 147,4	1 400,5	22,1	977,3	1 140,7	0,899	0,924
2. Pesca, camarón y larvas de camarón	0,2	1,7	660,5	28,7	17,1	-40,5	28,5	15,4	0,127	0,061
3. Petróleo y minas	16,4	23,6	44,0	2 144,6	3 258,1	51,9	2 128,2	3 234,4	0,630	0,723
4. Energía eléctrica, gas y agua	0,0	46,7		0,0	0,5		0,0	-46,2	0,000	0,274
5. Alimentos, bebidas y tabaco	195,4	456,8	133,8	849,0	1 350,6	59,1	653,6	893,9	0,980	1,227
6. Textiles y cuero	172,9	372,6	115,5	76,7	79,2	3,2	-96,1	-293,4	0,612	1,027
7. Madera y papel	197,9	330,2	66,9	79,9	98,7	23,5	-118,0	-231,5	0,859	1,168
8. Petroquímica	319,6	583,5	82,6	409,0	396,2	-3,1	89,4	-187,3	0,000	0,000
9. Química, caucho y plástico	2 038,1	1 434,1	-29,6	1 14,4	119,9	4,8	-1 923,7	-1 314,2	12,701	7,254
10. Otras industrias metálicas, no metálicas y equipo	1 882,1	3 861,7	105,2	201,9	316,7	56,8	-1 680,2	-3 545,0	10,258	16,620
11. Servicios privados	896,8	1 447,0	61,3	356,4	358,0	0,5	-540,4	-1 089,0	0,232	0,271
12. Intermediación financiera	45,6	82,8	81,8	0,5	0,5	-6,7	-45,0	-82,3	0,153	0,230
13. Enseñanza, salud y otros servicios personales	52,0	74,9	44,0	39,0	16,3	-58,2	-13,0	-58,6	0,100	0,096
Total	6 009,9	8 720,7	-45,1	5 905,6	7 917,0	34,1	-104,2	-803,7	0,748	0,812

Fuente: BCE

Así, todas las ramas de actividad, excepto pesca, camarón y larvas de camarón (2.), enseñanza, salud y otros servicios personales (13.) muestran un apreciable incremento de su grado de apertura. Sin embargo, solo las cinco primeras —excepto energía eléctrica, gas y agua— mejoraron sus balances sectoriales en 2005 (con respecto a 2000). Con excepción de alimentos, bebidas y tabaco (5.) y química, caucho y plástico (9.), todas las ramas de las economías manufacturera y de servicios (incluidos la intermediación financiera y los servicios de enseñanza, salud y otros servicios personales) registran agudos deterioros de sus balances externos. Lo que lleva a concluir que las exportaciones del sector primario de la economía ya no alcanzan a financiar las importaciones requeridas para sí mismo, para la industria y los servicios.

GRÁFICO 4. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 1993-2006



Fuente:
BCE

La información disponible confirma la necesidad de salir del modelo vigente diseñando una nueva estrategia productiva que dé un giro copernicano y pueda sustentar el desarrollo humano y sostenible del país. El acelerado crecimiento de las importaciones y el lento crecimiento de las exportaciones no petroleras dan cuenta de las escasas opciones de creación de puestos de trabajo digno, lo que ha contribuido a deteriorar las condiciones de vida de la población por la vía del desempleo, el subempleo, el empleo precario y la reducción de los salarios reales. El repunte de las exportaciones de petróleo, si bien contribuye a sostener el gasto fiscal, no representa una opción real para el

crecimiento del empleo, dada la mínima absorción de mano de obra de esa rama de actividad, extremadamente dependiente del factor capital. Al fin de cuentas, la apertura, que en el balance ha sido negativa desde 2001, está sostenida por las remesas enviadas desde el exterior por la mano de obra expulsada de un país que no presenta tasas de inversión satisfactorias en las ramas en las que más se puede asimilar la fuerza laboral (Gráfico 4).

La sociedad sufrió las consecuencias del ajuste estructural impuesto por la coalición de fuerzas políticas y económicas externas y las elites nacionales carentes de un proyecto propio más allá de seguir acumulando y defendiendo posiciones de privilegio. Una sociedad crecientemente fragmentada, polarizada entre sectores de ingreso, regiones, campo y ciudad, clases sociales, etnias y géneros mostró en momentos críticos su resistencia al abuso desmedido que llevó al deterioro de las vidas de las mayorías más allá de lo que estaban dispuestas a soportar. Las «turbulencias» políticas y la creciente desconfianza en las instituciones representativas confirmaron lo que las mismas políticas del Consenso de Washington, impulsadas por los organismos financieros multilaterales y la Organización Mundial de Comercio, ya anticipaban: el riesgo de ingobernabilidad de una sociedad cada vez más ostentosamente injusta.

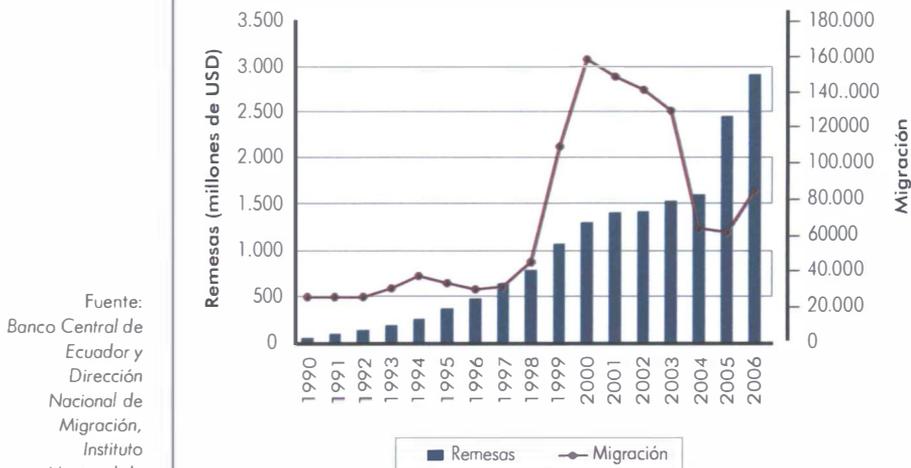
La respuesta a este dilema fue interesada (incluso fuente de negocios y de jugosos contratos), manipuladora y economicista: la política social asistencialista focalizada en los más pobres de los pobres. Esta forma de entender la política social se basó en el establecimiento de metas fijas definidas tecnocráticamente, obtenidas con programas basados en criterios de costo-eficiencia y en la reducción de la presión tributaria sobre el capital y los sectores de altos ingresos. La ejecución de estas políticas se hizo mediante programas especiales que desestructuraron a las instituciones estatales existentes sin generar más eficiencia. A ciertos funcionarios estatales se les ofrecían prebendas por fuera de los convenios de trabajo, lo que buscaba eliminar toda política integral del Estado y desorganizar a las fuerzas populares. Se reforzaron los mecanismos clientelares y estas prácticas se recubrieron de una retórica eficientista elaborada por técnicos y profesionales involucrados con las multilaterales de crédito y por una parte de las organizaciones no gubernamentales que crecieron bajo la idea de microproyectos productivos y programas focalizados en los pobres que no han modificado, en prácticamente nada, sus condiciones de vida.

A pesar de lo mencionado, los diseñadores y agentes de aquellas políticas continúan elaborando programas asistencialistas que intentan bloquear las opciones populares: elaboran proyectos en los que el microcrédito se define como un instrumento absoluto en

medio de un sistema financiero que sigue absorbiendo improductivamente los ahorros nacionales, o pretenden descubrir que los pobres tienen capital intangible que posibilita la «formación de patrimonios» al regularizar sus escasos activos, cuando en realidad el sistema sigue concentrando la masa de los grandes activos en pocas manos. Estos son ejemplos que muestran la necesidad de informar sobre el funcionamiento del sistema económico y de desmitificar fórmulas que pretenden un cambio sin modificar en realidad casi nada. La ilusión de que todos podemos ser capitalistas no se sostiene ante el hecho de que la mayoría de ecuatorianos son trabajadores que han sufrido despojo y a los que no se permite el ejercicio libre y pleno de sus capacidades.

Por otra parte, la fuerza de la economía popular, potenciada en la medida que va transitando a un sistema de economía social y solidaria, se evidencia cuando cientos de miles de unidades domésticas incorporan en su estrategia de reproducción social la emigración temporaria, el «se fue a volver», y en los envíos que los emigrantes hacen a sus familiares en nuestro país por un valor superior al principal producto de exportación en manos de las empresas concentradoras de capital. Es imprescindible crear condiciones para que el desarraigo sea revertido. Un modelo económico que no tenga como uno de sus objetivos la integración social y el arraigo voluntario de sus habitantes no merece salir de las pizarras. Esto solo será posible cuando sean las mayorías, con su Estado democrático, las que definan el rumbo de la economía.

GRÁFICO 5. INGRESOS POR REMESAS Y MIGRACIÓN 1990-2006



Fuente:
Banco Central de Ecuador y Dirección Nacional de Migración, Instituto Nacional de Estadística y Censos

* Los datos del 2006 sobre flujos migratorios están levantados hasta el mes de septiembre.

Hoy tenemos la posibilidad de impulsar y apoyar formas de economía solidaria como las que existen en la práctica en asociaciones de trabajadores, en asociaciones educativas y en distintas experiencias autogestionadas en diversos puntos del territorio nacional. Habrá quienes digan que estas formas económicas deben sostenerse sobre la base de sus propios resultados y que si requieren subsidios de algún tipo no merecen existir, porque no pasan la prueba del mercado. Esto es inadmisibles cuando las empresas, nacionales y extranjeras, y en ocasiones empresas del mismo Estado, o empresas como los mismos bancos, han sido subsidiadas de manera directa o indirecta por la sociedad ecuatoriana a través de transferencias monetarias, mediante las exenciones impositivas abiertas o mediante la no aplicación estricta del sistema fiscal.

• **Los grandes desafíos para el desarrollo humano en Ecuador**

La inviabilidad de dicha agenda neoliberal, luego de dos décadas de su despliegue y de resultados más que mediocres, es del todo evidente. La ciudadanía la ha rechazado electoralmente en Ecuador y en diversos países de Latinoamérica. En el nuestro, las elecciones de noviembre 2006 marcan precisamente el punto de inflexión para buscar nuevas alternativas de construcción de una sociedad justa. Por ello, bajo la coordinación del Estado, la tarea del conjunto de la sociedad es definir la ruta efectiva para que el país supere el largo ciclo de concentración de poder económico y político que lo ha caracterizado a lo largo de los últimos años.

En este contexto, es necesario tener una ruta como un instrumento para orientar los sentidos de una nueva estrategia de desarrollo efectivamente incluyente y empoderadora, que permita al país imaginarse hacia futuro como una nación justa, democrática y soberana.

Los retos que tal expectativa plantea están íntimamente ligados con la identificación y superación de los grandes problemas que hereda el país de los esquemas y modelos de desarrollo anteriores. El estudio y análisis económico-político de éstos ha permitido identificar, entre los más significativos, un conjunto de desafíos que el gobierno deberá encarar a fin de superar los problemas estructurales del desarrollo nacional:

Construir las bases de un proyecto nacional de desarrollo autónomo:

Sin la generación de un pensamiento crítico de carácter nacional, apoyado en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la cultura locales, será imposible proyectar hacia futuro un modo de desarrollo que brinde respuestas efectivas a los problemas internos del país. La defensa de los intereses nacionales exige la construcción autónoma e in-

dépendiente de esquemas de crecimiento y desarrollo que den respuestas pragmáticas y éticamente sustentadas a las generaciones presentes y futuras de Ecuador.

Democratizar los frutos del desarrollo y del crecimiento económico:

Las enormes desigualdades sociales y disparidades territoriales de Ecuador no pueden ser vistas únicamente como un problema de ineficacia en la apropiación colectiva de los recursos sino, a la vez, como un freno a las posibilidades de expansión del mercado interno y como un obstáculo ético y moral para que todos los ciudadanos se reconozcan entre sí como individuos aptos para ejercer sus libertades. Los niveles de crecimiento económico que puedan alcanzarse son inútiles si no logran ser transformados en recursos que potencien las capacidades individuales y habiliten el desarrollo de toda la comunidad nacional. Se trata entonces de procurar un tipo de crecimiento en que los activos productivos estén adecuadamente distribuidos en el conjunto de la sociedad a fin de que los diversos segmentos de la economía —la economía cooperativa, solidaria, rural, etc.— tengan oportunidad de desenvolverse y generar condiciones dignas de trabajo.

Proyectar las bases de un Ecuador pospetrolero:

Una economía moderna y con proyección de sostenibilidad en el tiempo no puede depender de la monoexportación de un producto cuya explotación tiene, además, un alto impacto en la destrucción del patrimonio natural del país y en la degradación de sus principales ecosistemas. El país debe encarar su futuro económico con una visión realista acerca del cercano agotamiento de sus reservas petroleras. Para ello un cambio en la matriz energética del país es indispensable. Ello remite, a la vez, a la necesidad de generar esquemas alternativos para el uso y la protección de dichas fuentes y a la urgencia de crear las bases para una plataforma productiva efectivamente diversificada y con capacidad de insertarse en el mercado internacional. Sin dicha diversificación, el fantasma de la «enfermedad holandesa» no dejará de cernir sobre nuestras expectativas de un desarrollo humano, inclusivo y sustentable en el tiempo. La plataforma básica de la oferta exportable es lograda a partir del mejoramiento de la productividad de amplios segmentos del aparato productivo, de un marco institucional eficiente y de una sociedad democrática, justa y soberana. La política comercial, necesaria para conducir este proceso, es proactiva (y no simplemente receptiva y pasiva), definida en función de las necesidades de desarrollo armónico de los mercados internos y de los encadenamientos productivos que posibiliten el cambio del patrón de vinculación comercial del país.

Articular el desenvolvimiento de la economía con los problemas del medio ambiente, la cultura y la sociedad:

El desarrollo humano es mucho más que crecimiento económico. Éste, la modernización y el cambio tecnológico son medios para el desarrollo. Para su consecución se requiere, además, observar el papel que juegan otras variables, como el medio ambiente, las relaciones sociales y las dinámicas culturales en la generación de límites y oportunidades para el desarrollo de las capacidades humanas. Se trata, entonces, de retomar las diversas reflexiones innovadoras que han surgido en los últimos años sobre los problemas del desarrollo: los planteamientos de una economía social y solidaria; el mirar el desarrollo como expansión y potenciación de las capacidades; el ecologismo «profundo» y sus planteamientos de limitar biofísicamente al crecimiento económico; las visiones más radicales que proponen ciertas rupturas con el sistema capitalista; y las visiones «posdesarrollistas» que han planteado diversos académicos y militantes de los países del sur en la perspectiva de valorar y promover un tipo de desenvolvimiento social enraizado en las particulares estrategias sociales y culturales de los diversos pueblos del mundo.

Democratizar el poder político y el Estado:

La desigualdad política ha marcado el desenvolvimiento excluyente de la democracia y la economía ecuatorianas a lo largo de su historia. Los grandes niveles de influencia y control político de los tradicionales grupos de poder en las orientaciones decisivas de la agenda pública han reforzado las históricas relaciones de dominación y hegemonía de aquéllos sobre el conjunto de la sociedad. La democratización del poder político apunta, por tanto, a potenciar la organización autónoma de los diversos segmentos de la sociedad civil y a promover la más amplia participación ciudadana en los procesos de planificación, gestión y control de la gestión estatal y del mismo desenvolvimiento de las instituciones de mercado. En esta perspectiva es de particular importancia potenciar a las organizaciones sociales debilitadas en el marco de la flexibilización y las reformas laborales de los años noventa y auspiciar las dinámicas asociativas en los sectores económicos en que las capacidades organizativas de la ciudadanía son en extremo frágiles y se corresponden con precarias condiciones de trabajo. Todo ello es inviable sin una efectiva y profunda reforma del Estado en la perspectiva de alcanzar la máxima descentralización, descorporativización y transparencia en sus modos de gestión y, a la vez, sin la real democratización del sistema de partidos políticos.

Propiciar un esquema de integración regional inteligente y soberano:

En un escenario mundial asimétrico, la apertura comercial indiscriminada y la libertad conferida a los flujos de capital internacional han probado ser tácticas limitadas y parciales para liderar el crecimiento económico. Los objetivos de desarrollo requieren de relaciones internacionales orientadas a la recuperación plena de la soberanía nacional, con una estrategia comercial pragmática, definida a partir de las necesidades de desarrollo armónico de todas las regiones del país. Ello implica abandonar las concesiones unilaterales no negociadas y las políticas de dominación hemisférica y promover iniciativas inscritas en el multilateralismo, la integración subregional, la ampliación de los mercados sur-sur y la activa participación en acuerdos multilaterales sobre medio ambiente y cambio climático. Dadas las asimetrías mundiales y en un contexto de dolarización, las negociaciones comerciales, económicas, políticas y energéticas deben conducirse a partir de la consolidación de bloques subregionales con otros países de Latinoamérica para la prevención de desastres, la exigencia a los países industrializados de compensaciones frente al cambio climático y la integración geopolítica en grandes proyectos de inversión conjunta.

BIBLIOGRAFÍA

- Campos, J. y Jiménez J. (2002). Concentración agregada y desigualdad entre empresas: Una comparación internacional.
- CEPAL. (2006). Panorama social de América Latina. Santiago: CEPAL.
- French-Davis, R. (2007). Privatizaciones, 15 Años después. Caracas: Nueva Sociedad No. 207, 2007. 1 Vol. 1; 112pp.
- PRODDAL-PNUD. (2004). Proyecto sobre la Democracia en América Latina.
- Stiglitz, J. (2003). El rumbo de las reformas. Hacia una nueva agenda para América Latina. En Revista de la CEPAL No. 80, Santiago.
- Vos, R. (2002). Ecuador: economic liberalization, adjustment and poverty, 1988-99. En Rob Vos, Lance Taylor y Ricardo Páez de Barros. Economic Liberalization, distribution and Poverty. Latin America in the 1990s. UK: Edgard Elgar Publishing Limited.
- Vos, R., Taylor y Páez de Barro. (2002). Economic lberalization, distribution and poverty: Latin America in the 1990´s. UK: Edwar Elgar, UNDP, Chelenhan.